

CARTA DE OPINIÓN

Nº 19

8 de agosto de 2008

**CRISIS BOLIVIANA Y REFERENDO REVOCATORIO
¿OPOSICION O CONSPIRACION?**

Carlos Gutiérrez P.
Director

Centro de Estudios Estratégicos CEE-Chile

El próximo domingo 10 de agosto, el pueblo boliviano se enfrentará a un acto inédito en la historia política de ese país, así como en nuestra región latinoamericana, con la convocatoria para el referendo revocatorio de los cargos de Presidente y Vicepresidente de la República, así como el de los Prefectos de los Departamentos, todos mandatos populares que fueron obtenidos a través de procesos electorarios democráticos.

Este solo acontecimiento político habla de la enorme vocación democrática del proyecto que encabeza el Presidente Evo Morales, al someter una vez más al veredicto popular las máximas instancias de poder del sistema político boliviano, como una fórmula posible para resolver la profunda crisis política que vive el país, y alejarlo de las formas clásicas de resolución de los conflictos, que se caracterizaban por la brutal participación de las Fuerzas Armadas como árbitro de la contienda, que en la gran mayoría de las ocasiones se realizaba con un costo humano importante, violaciones de los derechos de las personas y no respetando necesariamente la voluntad mayoritaria, sino más bien siendo objeto privilegiado de las elites tradicionales.

Este referendo revocatorio será un momento de máxima tensión que también significará poner a prueba el conjunto de las instituciones así como la totalidad de los actores sociales y políticos en sus decisiones y reales vocaciones por alcanzar soluciones a la crisis que estén dentro de las normas de la convivencia democrática, tanto en el plano nacional como en su referencia a la comunidad de naciones de la región que han insistido en el valor supremo de esta cualidad, para ser parte activa y respetable de este sistema internacional.

Este mismo acto plebiscitario, en sí, es una síntesis de los graves problemas políticos que vive la república boliviana, porque su convocatoria -pensada para que se constituyera en un mecanismo que dirimiera el camino institucional- ha estado contaminada con desacuerdos que tienen que ver con la legalidad del proceso.

Es justamente ésta, la característica más visible que ha asumido la profunda diferencia de proyectos de sociedad, que se ha expresado más agresivamente en el choque de visiones del ordenamiento institucional, que está siendo reformada muy decisivamente a partir de la necesidad de una nueva superestructura que pueda reflejar y sostener los cambios en el modelo de desarrollo que lleva adelante la actual presidencia.

Desde el proceso constituyente para la elaboración de una nueva Carta Fundamental del Estado hasta el concepto de autonomía que se enmarca en otra mirada de la

organización político institucional, han estado cruzadas por la confrontación de los arquetipos ideológicos que han entrampado de forma muy profunda el proceso político.

Esto ha significado en la práctica una dualidad de poderes. Por un lado el Poder Ejecutivo, representado en la figura del Presidente Morales y del gobierno central, y por otra, las figuras de la oposición que han adquirido representatividad a través de los Prefectos Departamentales, específicamente los de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija, Cochabamba y Chuquisaca. En total 6 de un total de 9, han tomado posturas francamente de desconocimiento de la legalidad vigente en materias electorales y constitucionales.

Cuatro de estos Departamentos, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, realizaron referéndum para la aprobación de sus respectivos estatutos autonómicos, en los cuales lograron holgadas victorias de aprobación de este instrumento que les permite la instalación de una gobernabilidad propia, que en muchos ámbitos entra en contradicción con el proyecto de un Estado unitario.

Junto a estos procesos, se ha desatado paulatina y progresivamente la violencia política, que ha tenido una manifestación concreta en los permanentes cortes de carreteras, enfrentamientos entre grupos opositores, en la organización de grupos paramilitares de derecha, particularmente con un perfil fascista en la ciudad de Santa Cruz, producto de las bandas paramilitares de jóvenes y en el constante hostigamiento a las labores gubernamentales, y muy especialmente ante la presencia del Presidente Morales en las distintas regiones. Se ha llegado a acciones extremas como la obstrucción de la comitiva presidencial, por tierra y por aire, en zonas del interior.

La estrategia de la derecha política ha sido la de generar ingobernabilidad. Ha optado por el camino de la desobediencia institucional, no reconociendo la propuesta de nueva Constitución Política; posteriormente se embarcó en las autonomías departamentales, a partir de las cuales están generando iniciativas gubernamentales en los planos económicos y sociales que no consideran la política nacional; y ahora concentra todas sus capacidades para la revocación del mandato presidencial.

Del mismo modo ha copado una agenda política y simbólica muy relevante como ha sido el de los históricos sentimientos regionalistas, llevando éste a una máxima confrontación, apropiándose de los conceptos de autodeterminación, participación popular, distribución, etcétera, lo que en muchos sectores sociales ha producido una pérdida de las referencias y de los contenidos sustanciales en el debate de los proyectos.

La construcción de una nueva experiencia de vida democrática impulsada por sectores que históricamente fueron marginados del proceso político y de las estrategias de desarrollo nacional, también se ha constituido en un desafío para las fuerzas políticas que están en el Ejecutivo, lo que conlleva un constante aprendizaje e innovación, del cual por supuesto no pueden estar ausentes los errores. El marco de las exigencias redistributivas, de igualdad en el acceso a bienes básicos y fundamentales, de una mayor integración física, del copamiento del territorio por las agencias estatales, de la ampliación de la cobertura educacional, de un mejor usufructo de sus riquezas básicas, del enfrentamiento a la producción ilegal de coca en marcos del respeto cultural y por los derechos de las personas, etcétera, han sido sin duda desafíos de una envergadura histórica.

La clásica confrontación socio-política boliviana estuvo remitida a una pugna de poderes al interior de la elite económica, que se resolvía a través de la conquista del poder político o de las intervenciones militares que dirimía el conflicto a favor de uno de los grupos. Así es como transcurrió el choque entre las elites del norte y las del sur del país, entre La Paz y Sucre, entre los sectores más liberales y los conservadores, entre los properuanos y los autonómicos. Hoy día se viste de la pugna entre el oriente

rico y el occidente pobre e indígena, pero esta vez cruzado por una variable, que no había estado presente en los conflictos anteriores, cual es la presencia como sujeto activo del actor indígena, que empoderadamente busca influir en su propio destino.

La elite boliviana resolvió este viejo dilema con la creación de un Estado Nacional del cual se apropió absolutamente y lo incluyó en el juego del “demos”. Es decir, en una democracia representativa con una participación popular acotada a las elecciones periódicas. La ruptura de Evo Morales incorpora la variable del *etnos*, que busca reconfigurar el carácter del Estado e iniciar un proyecto refundacional de desarrollo.

La justa articulación entre el *demos* y el *etnos* es una tarea fundamental para el éxito del proyecto del Presidente Morales. Es decir, un pluralismo étnico armonizado en un Estado, en que lo nacional y lo regional puedan ser expresiones válidas de un mismo proyecto.

Lamentablemente la oposición política ha asumido como una opción válida el desmembramiento de ese viejo Estado Nacional, hoy copado por un actor subalterno, apostando a las autonomías regionales, donde puede todavía articular su poderío económico, político y social, casi como el viejo cacicazgo del siglo XIX. Para esto se ampara en un sentimiento arraigado y en un constante desacato del gobierno central y su legalidad.

En este sentido, en cuanto nos encontramos con estrategias políticas muy solidificadas, no es del todo claro que con el referéndum del próximo domingo se pueda canalizar la resolución del conflicto por la vía pacífica y sin traumas para la sociedad. No hay indicios de que la oposición respete resultados amparados en una legalidad que desconoce hace bastante tiempo.

Tampoco está del todo despejado el camino que transitará el gobierno del Presidente Morales para hacer viable los resultados del referendo, que actualmente le aparecen como favorables. Hasta ahora el llamado para respetar las normas legales y constitucionales, ante una oposición resiliente, no ha sido satisfactorio. Ante esto, lamentablemente el factor fuerza seguramente rondará en muchas cabezas.

Por esto que es justo preguntarse si la opción política de esta elite desplazada del poder se podrá mantener dentro de los cánones clásicos de la oposición a un gobierno electo popularmente en un modelo republicano, o claramente es la opción de una conspiración política, que sólo espera articular el factor fuerza para dar su golpe de gracia al soberano ^{CEE}